

comerciales y busca atraer toda la acción humana al dominio del mercado. Ésto exige tecnologías de creación de información y capacidad de almacenar, transferir, analizar y utilizar enormes bases de datos para guiar la toma de decisiones en el mercado global. De ahí la búsqueda y el intenso interés del neoliberalismo en las tecnologías de la información (lo que ha llevado a algunos a proclamar la emergencia de una nueva clase de “sociedad de la información”). Estas tecnologías han comprimido tanto en el espacio como en el tiempo, la creciente densidad de transacciones comerciales. Han producido una explosión particularmente intensa de lo que en otras ocasiones he denominado “compresión espaciotemporal”. Cuanto más amplia sea la escala geográfica (Lo que explica el énfasis en la “globalización”) y más cortos los plazos de los contratos mercantiles, mejor. Esta última preferencia concuerda con la famosa descripción de Lyotard de la condición posmoderna, como aquella en la que el “contrato temporal” sustituye a las “instituciones permanentes en la esfera profesional, emocional, sexual, cultural, internacional y familiar, así como también en los asuntos políticos”. Las consecuencias culturales del dominio de esta ética del mercado son innumerables, tal y como describí previamente en *The Condition of Posmodernity*<sup>3</sup>.

Si bien en la actualidad contamos con muchos análisis generales de las transformaciones globales y de sus efectos, carecemos –y ésta es la brecha que aspira llenar este libro– de un relato político-económico del origen de la neoliberalización y del modo en que ha proliferado de manera tan generalizada a escala mundial. Por otro lado, abordar esta historia desde una perspectiva crítica, sirve para proponer un marco para identificar y construir acuerdos políticos y económicos alternativos.

En los últimos tiempos me he beneficiado de las conversaciones mantenidas con Gerard Duménil, Sam Gindin y Leo Panitch. Asimismo, arrastro deudas que vienen de más atrás con Masao Miyoshi, Giovanni Arrighi, Patrick Bond, Cindi Katia, Neil Smith, Bertell Ollman, María Kaika y Erick Swyngedouw. Una conferencia sobre neoliberalismo patrocinada por la Fundación Rosa Luxemburgo y celebrada en Berlín, en noviembre de 2001, despertó mi interés sobre el tema de este libro. Doy las gracias, principalmente, aunque no exclusivamente, al rector del CUNY Graduate Center, Bill Nelly, y a mis colegas y estudiantes del Programa de Antropología, por su interés y por el apoyo que me han brindado. Y, por supuesto, absuelvo a todo el mundo de cualquier responsabilidad por los resultados.

<sup>3</sup> D. Harvey, *The Condition of Posmodernity*, Oxford, Basil Blackwell, 1989 (Ed. Cast. *La Condición de la Posmodernidad*, Buenos Aires, Amorrortu, 1998). J.F. Lyotard, *The Posmodern Condition*, Manchester, Manchester University Press, 1984, pp. 66 (ed. cast.: *La condición posmoderna*. Madrid, Ediciones Cátedra, 1989).

# I

## La libertad no es más que una palabra...

Para que cualquier forma de pensamiento se convierta en dominante, tiene que presentarse un aparato conceptual que sea sugerente para nuestras intuiciones, nuestros instintos, nuestros valores y nuestros deseos así como también para las posibilidades inherentes al mundo social que habitamos. Si ésto se logra, este aparato conceptual se injerta de tal modo en el sentido común que pasa a ser asumido como algo dado y no cuestionable. Los fundadores del pensamiento neoliberal tomaron el ideal político de la dignidad y de la libertad individual, como pilar fundamental que consideraron “los valores centrales de la civilización”. Realizaron una sensata elección ya que efectivamente se trata de ideales convincentes y sugestivos. En su opinión, estos valores se veían amenazados no sólo por el fascismo, las dictaduras y el comunismo, sino por todas las formas de intervención estatal que sustitúan con valoraciones colectivas la libertad de elección de los individuos.

La idea de dignidad y de libertad individual son conceptos poderosos y atrayentes por sí mismos. Estos ideales reafirmaron a los movimientos disidentes en Europa del Este y en la Unión Soviética antes del final de la Guerra Fría, así como a los estudiantes de la Plaza de Tiananmen. Los movimientos estudiantiles que sacudieron el mundo en 1968 -desde París y Chicago hasta Bangkok y Ciudad de México- estaban en parte animados por la búsqueda de una mayor libertad de expresión y de elección individuales. En términos más generales, estos ideales atraen a cualquier persona que aprecie la facultad de tomar decisiones por sí misma.

La idea de libertad, inserta en la tradición estadounidense desde hace largo tiempo, ha desempeñado un notable papel en Estados Unidos en los últimos años. El «11 de septiembre»<sup>4</sup> fue interpretado de manera inmediata por muchos analistas como un ataque contra ella. «Un mundo pacífico en el que crece la libertad», escribió el presidente Bush en el primer aniversario de aquél fatídico día, «al servicio de los intereses a largo plazo de Estados Unidos, que refleja la permanencia de los ideales estadounidenses y que une a los aliados de este país». «La humanidad», concluía, «sostiene en sus manos la oportunidad de ofrecer el triunfo de la libertad sobre todos sus enemigos seculares» y «Estados Unidos recibe con alegría sus responsabilidades al mando de esta gran misión». Este lenguaje fue incorporado al documento titulado Estrategia de Defensa Nacional Estadounidense que fue emitido poco después. «La libertad es el regalo del Todopoderoso a todos los hombres y mujeres del mundo» dijo posteriormente añadiendo que «en tanto que la mayor potencia sobre la tierra, nosotros tenemos la obligación de ayudar a la expansión de la libertad»<sup>5</sup>.

Cuando todas las restantes razones para emprender una guerra preventiva contra Iraq se revelaron deficientes, el presidente apeló a la idea de que la libertad otorgada a Iraq era en sí misma y por sí misma una justificación adecuada de la guerra. Los iraquíes eran libres y eso era todo lo que realmente importaba. Pero qué tipo de libertad se vislumbra aquí si, tal y como el crítico cultural Matthew Arnold<sup>6</sup> reflexionó hace mucho tiempo, «la libertad es un caballo muy bueno para cabalgar sobre él, pero para ir a algún sitio»<sup>7</sup>. ¿A qué destino, por consiguiente, se espera que encamine el pueblo iraquí el caballo de la libertad que se le ha donado por la fuerza de las armas?

La respuesta de la Administración Bush a esta cuestión quedó clara el 19 de septiembre de 2003, cuando Paul Bremer, director de la Autoridad Provisional de la Coalición,

<sup>4</sup> En el original de editorial AKAL, dice 9 de septiembre. Parto del supuesto que fue un error del traductor ya que en inglés se expresa 9/11. En consecuencia, he corregido la fecha porque entiendo que refiere al ataque a las torres gemelas del 2001.

<sup>5</sup> G. W. Bush, «President Addresses the Nation in Prime Time Press Conference», 13 de abril de 2004; <http://www.Whitehouse.gov/news/releases/2004/0420040413-20.html>.

<sup>6</sup> Matthew Arnold : (1822-1888) Poeta y crítico inglés ([Wikipedia](#))

<sup>7</sup> Las citas de Matthew Arnold proceden de R. Williams, *Culture and Society*, 1780-1850, Londres, Chatto & Windus, 1958, p. 118.

promulgó cuatro decretos en los que se preveía «la plena privatización de las empresas públicas, plenos derechos de propiedad para las compañías extranjeras que hayan adquirido y adquieran empresas iraquíes, la plena repatriación de los beneficios extranjeros [...] la apertura de los bancos iraquíes al control extranjero, la dispensación de un tratamiento nacional a las compañías extranjeras y [...] la eliminación de prácticamente todas las barreras comerciales»<sup>8</sup>. Estos decretos iban a ser aplicados en todas las esferas económicas, incluyendo los servicios públicos, los medios de comunicación, la industria, los servicios, los transportes, las finanzas y la construcción. Únicamente el petróleo quedaría exento (presumiblemente debido a su especial estatus como generador de rentas para pagar la guerra y su relevancia geopolítica). El mercado del trabajo, a su vez, iba a estar estrictamente regulado. Las huelgas estarían efectivamente prohibidas en los sectores clave de la economía y el derecho de sindicación restringido. Igualmente, se implantó un «sistema impositivo fijo» sumamente regresivo (un ambicioso plan de reforma fiscal defendido desde hacía mucho tiempo por los conservadores para su implementación en Estados Unidos).

En opinión de algunos analistas, estos decretos eran una violación de las Convenciones de Ginebra y de la Haya, ya que un país ocupante tiene el deber de proteger los activos de un país ocupado en lugar de liquidarlos<sup>9</sup>. Algunos iraquíes opusieron resistencia a lo que *The Economist* londinense denominó régimen del «sueño capitalista» en Iraq. Un miembro de la Autoridad Provisional de la Coalición nombrada por Estados Unidos criticó enérgicamente la imposición del «fundamentalismo de libre mercado», al que denominó «una lógica errada que ignora la historia»<sup>10</sup>. Aunque las normas de Bremer pudieran haber sido ilegales por venir impuestas por una potencia ocupante, podían convertirse en legales si eran confirmadas por un gobierno «soberano». El gobierno interino nombrado por Estados Unidos que asumió el poder a finales de junio de 2004 fue declarado «soberano», pero únicamente tenía poder para confirmar las leyes existentes. Antes del traspaso de poderes, Bremer multiplicó el número de leyes destinadas a especificar hasta en los últimos detalles las reglas del mercado libre y del libre comercio (en cuestiones tan pormenorizadas como las leyes que regulan los derechos de autor y las leyes de propiedad intelectual), expresando su esperanza de que estos pactos institucionales «cobrarán vida y fuerza propias» de tal forma que resultaran muy difíciles de revertir<sup>11</sup>.

De acuerdo con la teoría neoliberal, el tipo de medidas perfiladas por Bremer eran tan necesarias como suficientes para la creación de riqueza y, por lo tanto, para el progreso del bienestar de la población en general. La suposición de que las libertades individuales

<sup>8</sup> A. Juhasz, «Ambitions of Empire. The Bush Administration Economic Plan for Iraq (and Beyond)», *Left Turn Magazine* 12 (febrero-marzo 2004), pp. 27-32.

<sup>9</sup> N. Klein, «Of Course the White House fears Free Elections in Iraq», *The Guardian*, 24 de enero de 2004, p. 18.

<sup>10</sup> T. Crampton, «Iraqi Official urges Caution on Imposing Free Market», *The New York Times*, 24 de enero de 2004, p. 18.

<sup>11</sup> A. Juhasz, «Ambitions of Empire. The Bush Administration Economic Plan for Iraq (And Beyond)», cit, p. 29.

se garantizan mediante la libertad de mercado y de comercio, es un rasgo cardinal del pensamiento neoliberal, y ha dominado durante largo tiempo la postura de Estados Unidos hacia el resto del mundo<sup>12</sup>. Evidentemente, lo que Estados Unidos pretendía imponer por la fuerza en Iraq, era un aparato estatal cuya misión fundamental era facilitar las condiciones para una provechosa acumulación de capital tanto por parte del capital extranjero como del doméstico. A esta forma de aparato estatal la denominaré Estado neoliberal. Las libertades que encarna reflejan los intereses de la propiedad privada, las empresas, las compañías multinacionales, y el capital financiero. En definitiva, Bremer invitó a los iraquíes a cabalgar su caballo de la libertad directo hacia la cuadra neoliberal.

Merece la pena recordar que el primer experimento de formación de un Estado neoliberal se produjo en Chile tras el golpe de Pinochet el «11 de septiembre menor» de 1973 (casi treinta años antes del día del anuncio del régimen que iba a instalarse en Iraq por parte de Bremer). El golpe contra el gobierno democráticamente elegido de Salvador Allende fue promovido por las elites económicas domésticas que se sentían amenazadas por el rumbo hacia el socialismo de su presidente. Contó con el respaldo de compañías estadounidenses, de la CIA, y del secretario de Estado estadounidense Henry Kissinger. Reprimió de manera violenta todos los movimientos sociales y las organizaciones políticas de izquierda y desmanteló todas las formas de organización popular (como los centros de salud comunitarios de los barrios pobres) que existían en el país. El mercado de trabajo, a su vez, fue «liberado» de las restricciones reglamentarias o institucionales (el poder de los sindicatos, por ejemplo). ¿Pero de qué modo iba a ser reactivada su estancada economía? Las políticas de sustitución de las importaciones (fomentando las industrias nacionales mediante subvenciones o medidas de protección arancelaria) que habían dominado las tentativas latinoamericanas de desarrollo económico, habían caído en el descrédito, particularmente en Chile, donde nunca habían funcionado especialmente bien. Con el mundo entero en recesión económica, se requería un nuevo enfoque.

Para ayudar a reconstruir la economía chilena, se convocó a un grupo de economistas conocidos como los “Chicago boys” a causa de su adscripción a las teorías neoliberales de Milton Friedman, que entonces enseñaba en la Universidad de Chicago. La historia de cómo fueron elegidos es interesante. Desde la década de 1950 Estados Unidos había financiado la formación de algunos economistas chilenos en la Universidad de Chicago, como parte de un programa de la Guerra Fría destinado a contrarrestar las tendencias izquierdistas en América Latina. Estos economistas formados en Chicago, llegaron a dominar la Universidad Católica privada de Santiago de Chile. A principios de la década de 1970, las elites financieras organizaron su oposición a Allende a través de un grupo llamado «el Club de los lunes», y desarrollaron una productiva relación con estos

<sup>12</sup> G. W. Bush, “Securing Freedom’s Triumph”, *The New York Times*, 11 de septiembre de 2002, A33. *The National Security Strategy of the United States of America* se encuentra disponible en el sitio web: [www.whitehouse.gov/nsc/nss](http://www.whitehouse.gov/nsc/nss)

economistas financiando sus trabajos a través de institutos de investigación. Después de que el general Gustavo Leigh, rival de Pinochet para auparse al poder y defensor de las ideas keynesianas, fuera arrinconado en 1975, Pinochet puso a estos economistas en el gobierno donde su primer trabajo fue negociar los créditos con el Fondo Monetario Internacional. El fruto de su trabajo junto al FMI, fue la reestructuración de la economía en sintonía con sus teorías. Revirtieron las nacionalizaciones y privatizaron los activos públicos, abrieron los recursos naturales (la industria pesquera y la maderera, entre otras) a la explotación privada y desregulada (en muchos casos sin prestar la menor consideración hacia las reivindicaciones de los habitantes indígenas), privatizaron la Seguridad Social y facilitaron la inversión extranjera directa y una mayor libertad de comercio. El derecho de las compañías extranjeras a repatriar los beneficios de sus operaciones chilenas fue garantizado. Se favoreció un crecimiento basado en la exportación frente a la sustitución de las importaciones. El único sector reservado al Estado, fue el recurso clave del cobre (al igual que el petróleo en Iraq). Ésto se reveló crucial para la viabilidad presupuestaria del Estado, puesto que los ingresos del cobre fluían exclusivamente hacia sus arcas. La reactivación inmediata de la economía chilena en términos de tasa de crecimiento, acumulación de capital y una elevada tasa de rendimiento sobre las inversiones extranjeras, no duró mucho tiempo. Todo se agrió en la crisis de la deuda que azotó América Latina en 1982. Como resultado, en los años que siguieron se produjo una aplicación mucho más pragmática y menos conducida por la ideología de las políticas neoliberales. Todo este proceso, incluido el pragmatismo, sirvió para proporcionar una demostración útil para apoyar el subsiguiente giro hacia el neoliberalismo, tanto en Gran Bretaña (bajo el gobierno de Thatcher) como en Estados Unidos (bajo el de Reagan), en la década de 1980. De este modo, y no por primera vez, un brutal experimento llevado a cabo en la periferia se convertía en un modelo para la formulación de políticas en el centro (muy parecido a la experimentación con un sistema impositivo fijo en Iraq, propuesto en el marco de los decretos de Bremer)<sup>13</sup>.

El hecho de que dos reestructuraciones del aparato estatal que presentan una similitud tan manifiesta, hayan ocurrido en épocas tan distintas y en lugares tan diferentes del mundo bajo la influencia coactiva de Estados Unidos, sugiere que el alcance inexorable del poder imperial estadounidense, podría obedecer a la rápida proliferación de formas estatales neoliberales alrededor del mundo registradas desde mediados de la década de 1970. Aunque sin duda ésto se haya producido a lo largo de los últimos treinta años, en ningún caso constituye toda la historia, como muestra el elemento doméstico del giro neoliberal en Chile. Por otro lado, Estados Unidos no obligó a Margaret Thatcher a adentrarse en la inexplorada senda neoliberal en 1979. Como tampoco obligó a China, en 1978, a emprender el camino hacia la liberalización. Los restringidos movimientos

<sup>13</sup> M. Fourcade-Gourinchas y S. Babb, «The Rebirth of the Liberal Creed. Paths to Neoliberalism in Four Countries», *American Journal of Sociology* 108 (2002), pp. 542-549; J. Valdez, *Pinochet’s Economists. The Chicago School in Chile*, Nueva York, Cambridge University Press, 1995; R. Luders, «The Success and Failure of the State-Owned Enterprise Divestitures in a Developing Country. The Case of Chile», *Journal of World Business* (1993), pp. 98-121.

hacia la neoliberalización de India en la década de 1980 y de Suecia a principios de la de 1990, no pueden atribuirse fácilmente al alcance imperial del poder estadounidense. Evidentemente, el desarrollo geográfico desigual del neoliberalismo a escala mundial, ha sido un proceso de gran complejidad que ha entrañado múltiples determinaciones y no poco caos y confusión. ¿Por qué, entonces, se produjo el giro neoliberal y cuáles fueron las fuerzas que le otorgaron su hegemonía dentro del capitalismo global?

## ¿Por qué el giro neoliberal?

La reestructuración de las formas estatales y de las relaciones internacionales después de la Segunda Guerra Mundial, estaba concebida para prevenir un regreso a las catastróficas condiciones que habían amenazado como nunca antes el orden capitalista en la gran depresión de la década de 1930. Al parecer, también iba a evitar la reemergencia de las rivalidades geopolíticas interestatales que habían desatado la guerra.

Como medida para asegurar la paz y la tranquilidad en la escena doméstica, había que construir cierta forma de compromiso de clase entre el capital y la fuerza de trabajo. Tal vez, el mejor retrato del pensamiento de la época se encuentre en un influyente texto escrito por dos eminentes sociólogos, Robert Dahl y Charles Lindblom, que fue publicado en 1953. En opinión de ambos autores, tanto el capitalismo como el comunismo en su versión pura, habían fracasado. El único horizonte por delante era construir la combinación precisa de Estado, mercado e instituciones democráticas para garantizar la paz, la integración, el bienestar y la estabilidad.<sup>14</sup> En el plano internacional, un nuevo orden mundial era erigido a través de los acuerdos de Bretton Woods<sup>15</sup>, y se crearon diversas instituciones como la Organización de las Naciones Unidas, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco de Pagos Internacionales de Basilea, que tenían como finalidad contribuir a la estabilización de las relaciones internacionales. Asimismo, se incentivó el libre comercio de bienes mediante un sistema de tipos de cambio fijos, sujeto a la convertibilidad del dólar estadounidense en oro a un precio fijo. Los tipos de cambio fijos eran incompatibles con la libertad de los flujos de capital que tenían que ser controlados, pero Estados Unidos tenía que permitir la libre circulación del dólar más allá de sus fronteras si el dólar iba a funcionar como moneda de reserva global. Este sistema existió bajo el paraguas protector de la potencia militar de Estados Unidos. Únicamente la Unión Soviética y la Guerra Fría imponían un límite a su alcance global.

<sup>14</sup> R. Dahl y C. Lindblom, *Politics, Economy and Welfare. Planning and Politics-Economic Systems Resolved into Basic Social Processes*, Nueva York, Harper, 1953.

<sup>15</sup> Los **Acuerdos de Bretton Woods** son las resoluciones de la *Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas*, realizada en el complejo hotelero de Bretton Woods, (Nueva Hampshire), entre el 1 y el 22 de julio de 1944, donde se establecieron las reglas para las relaciones comerciales y financieras entre los países más industrializados del mundo. En él se decidió la creación del Banco Mundial (BM) y del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el uso del dólar como moneda internacional. Esas organizaciones se volvieron operacionales en 1946. (Fuente: [Wikipedia](#))

Después de la Segunda Guerra Mundial, en Europa emergieron una variedad de Estados socialdemócratas, demócratacristianos y dirigistas. Estados Unidos, por su parte, se inclinó hacia una forma estatal demócrataliberal y Japón, bajo la atenta supervisión de Estados Unidos, cimentó un aparato estatal en teoría democrático pero en la práctica sumamente burocrático facultado para supervisar la reconstrucción del país. Todas estas formas estatales diversas tenían en común la aceptación de que el Estado debía concentrar su atención en el pleno empleo, en el crecimiento económico y en el bienestar de los ciudadanos, y que el poder estatal debía desplegarse libremente junto a los procesos del mercado -o, si fuera necesario, interviniendo en él o incluso sustituyéndole-, para alcanzar esos objetivos. Las políticas presupuestarias y monetarias generalmente llamadas “keynesianas” fueron ampliamente aplicadas para amortiguar los ciclos económicos y asegurar un práctico pleno empleo. Por regla general, se defendía un «compromiso de clase» entre el capital y la fuerza de trabajo como garante fundamental de la paz y de la tranquilidad en el ámbito doméstico. Los Estados intervinieron de manera activa en la política industrial y se implicaron en la fijación de fórmulas establecidas de salario social diseñando una variedad de sistemas de protección (asistencia sanitaria y educación, entre otros).

Actualmente es habitual referirse a esta organización político-económica como «liberalismo embridado» para señalar el modo en que los procesos del mercado así como las actividades empresariales y corporativas, se encontraban cercadas por una red de constreñimientos sociales y políticos y por un entorno regulador que en ocasiones restringían, pero en otras instancias señalaban la estrategia económica e industrial<sup>16</sup>. Se recurría con frecuencia (por ejemplo, en Gran Bretaña, Francia e Italia) a la planificación estatal y en algunas instancias a la propiedad pública de sectores clave de la economía (como el carbón, el acero o la industria automovilística). El proyecto neoliberal consiste en desembridar al capital de estos constreñimientos.

El liberalismo embridado generó altas tasas de crecimiento económico en los países del capitalismo avanzado durante las décadas de 1950 y 1960<sup>17</sup>. En cierta medida éste dependió de la dadivosidad de Estados Unidos al estar dispuesto a asumir déficit con el resto del mundo y absorber cualquier producto excedente dentro de sus fronteras. Este sistema reportó beneficios como la expansión de los mercados de exportación (de manera más evidente para Japón, pero también de manera desigual al conjunto de América Latina y a algunos otros países del sureste asiático), pero las tentativas de exportar “desarrollo” a gran parte del resto del mundo, se vieron en buena medida encalladas. En la mayor parte del Tercer Mundo, particularmente en África, el liberalismo embridado continuó siendo un sueño imposible. La deriva subsiguiente hacia

<sup>16</sup> S. Krasner (ed.), *Internacional Regimes*, Ithaca (NY), Cornell University Press, 1983; M. Blyth, *Great Transformations. Economic Ideas and Institutional Change in the Twentieth Century*, Cambridge, Cambridge University Press, 2002.

<sup>17</sup> P. Armstrong, A. Glynn, y J. Harrison, *Capitalism Since World War II. The Making and Breaking of the Long Boom*, Oxford, Basil Blackwell, 1991.

# II

## La construcción del consentimiento

¿De qué modo se consumó la neoliberalización, y quién la implementó? La respuesta, en países como Chile y Argentina en la década de 1970 fue tan simple como súbita, brutal y segura, ésto es, mediante un golpe militar respaldado por las clases altas tradicionales (así como también por el gobierno estadounidense), seguido de una represión salvaje de todos los vínculos de solidaridad instaurados en el seno de la fuerza de trabajo y de los movimientos sociales urbanos que tanto habían amenazado su poder. Pero la revolución neoliberal que suele atribuirse a Thatcher y a Reagan, después de 1979 tuvo que consumarse a través de medios democráticos. Para que se produjera un giro de tal magnitud fue necesaria la previa construcción del consentimiento político a lo largo de un espectro lo bastante amplio de la población como para ganar las elecciones. Lo que Gramsci llama «sentido común» (definido como «el sentido poseído en común») es lo

que, de manera característica, cimienta el consentimiento. El sentido común se construye a partir de prácticas asentadas en el tiempo de socialización cultural a menudo hondamente enraizadas en tradiciones regionales o nacionales. No es lo mismo que el «buen juicio», que puede construirse a partir de la implicación crítica con las cuestiones de actualidad. Por lo tanto, el sentido común puede engañar, ofuscar, o encubrir profundamente problemas reales bajo prejuicios culturales<sup>50</sup>. Los valores culturales y tradicionales (como la creencia en Dios y en el país, o las opiniones sobre la posición de las mujeres en la sociedad) y los miedos (a los comunistas, a los inmigrantes, a los extraños o a los «otros») pueden ser movilizados para enmascarar otras realidades. Pueden invocarse eslóganes políticos que enmascaran estrategias específicas debajo de dispositivos retóricos imprecisos. La palabra «libertad» resuena tan ampliamente dentro del sentido común de los estadounidenses que se convierte en un «botón que las elites pueden pulsar para acceder a la masas» con el fin de justificar prácticamente todo<sup>51</sup>. De este modo, Bush pudo justificar retrospectivamente la guerra de Iraq. Gramsci concluía, por lo tanto, que las cuestiones políticas se convierten en «insolubles» cuando se «disfrazan como culturales»<sup>52</sup>. Al tratar de comprender la construcción del consentimiento político, debemos aprender a extraer significados políticos de sus integumentos<sup>53</sup> culturales.

Así pues, ¿cómo, entonces, se generó el grado suficiente de consentimiento popular preciso para legitimar el giro neoliberal? Los canales a través de los cuales se llevó esto a cabo fueron diversos. Poderosas influencias ideológicas circularon a través de las corporaciones, de los medios de comunicación y de las numerosas instituciones que constituyen la sociedad civil, como universidades, escuelas, iglesias, y asociaciones profesionales. Gracias a la «larga marcha» de las ideas neoliberales a través de estas instituciones, que Hayek ya había vaticinado en 1947, así como a la organización de *think-tanks* (con el respaldo y la financiación de la corporaciones), a la captura de ciertos segmentos de los medios de comunicación y a la conversión de muchos intelectuales a modos de pensar neoliberales, se creó un clima de opinión que apoyaba el neoliberalismo como el exclusivo garante de la libertad. Estos movimientos se consolidaron con posterioridad mediante la captura de partidos políticos y, por fin, del poder estatal.

La apelación a las tradiciones y a los valores culturales fue muy importante en este proceso. Un proyecto manifiesto sobre la restauración del poder económico en beneficio de una pequeña elite probablemente no cosecharía un gran apoyo popular. Pero una tentativa programática para hacer avanzar la causa de las libertades individuales podría atraer a una base muy amplia de la población y de este modo encubrir la ofensiva

<sup>50</sup> A. Gramsci, *Selections from the Prison Notebooks*, Londres, Lawrence & Wishart, 1971, pp. 321-343.

<sup>51</sup> J. Rapley, *Globalization and Inequality. Neoliberalism's Downward Spiral*, Boulder (CO), Lynne Reiner, 2004, p. 55.

<sup>52</sup> A. Gramsci, *Selections from the Prison Notebooks*, cit., p. 149.

<sup>53</sup> Integumento: Envoltura o cobertura; Disfraz, ficción, fábula.

encaminada a restaurar el poder de clase. Por otro lado, una vez que el aparato estatal efectúe el giro neoliberal, podía utilizar sus poderes de persuasión, cooptación, de soborno y de amenaza para mantener el clima de consentimiento necesario para perpetuar su poder. Tal y como veremos, éste fue el punto fuerte particular de Thatcher y de Reagan.

¿Cómo, entonces, negoció este giro el neoliberalismo para desplazar de manera tan arrolladora al liberalismo embridado? En algunos casos, la respuesta descansa en buena medida en el uso de la fuerza (ya sea militar, como en Chile, o financiera, como ocurre a través de las operaciones del FMI en Mozambique o en Filipinas). La coerción puede producir una aceptación fatalista, incluso abyecta, de la idea de que no había ni hay «alternativa», tal y como Margaret Thatcher continúa insistiendo. La construcción activa de consentimiento también ha variado de un lugar a otro. Asimismo, gracias a la actividad de los múltiples movimientos opositores existentes, el consentimiento a menudo se ha marchitado o ha fracasado en diferentes lugares. Pero debemos mirar más allá de estos mecanismos culturales e ideológicos infinitamente variados -con independencia de la importancia que tengan- y centrar la atención en las cualidades de la experiencia cotidiana en aras a identificar mejor las bases materiales de la construcción del consentimiento. Y es, en este nivel -el de la experiencia de la vida cotidiana bajo el capitalismo en la década de 1970-, en el que empezamos a ver de qué modo el neoliberalismo penetró en el «sentido común». En muchas partes del mundo el efecto ha sido que cada vez más sea considerado como una forma necesaria, incluso plenamente «natural», de regular el orden social.

Todo movimiento político que sostenga que las libertades individuales son sacrosantas es vulnerable a ser incorporado al redil neoliberal. Por ejemplo, las revueltas políticas que barrieron el mundo en 1968 estuvieron declinadas, de manera muy acusada, con el deseo de conseguir una mayor libertad individual. Esta afirmación resulta inapelable respecto a los movimientos estudiantiles, como los animados por el movimiento por la «libertad de expresión» en Berkeley en la década de 1960, o los que tomaron las calles en París, en Berlín y en Bangkok y que fueron tan despiadadamente batidos a tiros en Ciudad de México poco antes de los Juegos Olímpicos de 1968. Demandaban libertad frente a los constreñimientos paternos, educativos, corporativos, burocráticos, y estatales. Pero el movimiento del 68 también tenía la justicia social como objetivo político fundamental.

Sin embargo, los valores de la libertad individual y de la justicia social no son necesariamente compatibles. La búsqueda de la justicia social presupone vínculos de solidaridad social y una disposición a sumergir las carencias, necesidades y deseos individuales en la causa de una lucha algo más general por la igualdad social o la justicia medioambiental, por citar dos ejemplos. Los objetivos de la justicia social y de la libertad individual se fundieron de manera tensa en el movimiento del 68. Esta tensión

se tornó más evidente en la tirante relación que se estableció entre la izquierda tradicional (la fuerza de trabajo organizada y los partidos políticos que apoyaban los vínculos institucionalizados de solidaridad social) y el movimiento estudiantil deseoso de libertades individuales. La sospecha y la hostilidad que separaron a estas dos facciones en Francia (por ejemplo, la distancia que surgió entre el Partido Comunista y el movimiento estudiantil) durante los acontecimientos de 1968 es un claro ejemplo de la misma. Aunque no es imposible salvar tales diferencias, tampoco es difícil ver de qué modo ambos podrían ser empujados a quedar atrapados en las mismas. La retórica neoliberal, con su énfasis fundacional en las libertades individuales, tiene el poder de escindir el libertarismo, la política de la identidad, el multiculturalismo y, eventualmente, el consumismo narcisista de las fuerzas sociales alineadas en pro de la justicia social a través de la conquista del poder estatal. Por ejemplo, hace mucho tiempo que se demostró extremadamente difícil forjar en el seno de la izquierda estadounidense, la disciplina colectiva requerida para que la acción política logre alcanzar la justicia social sin atentar contra el deseo de los actores políticos de obtener libertad individual y el pleno reconocimiento y expresión de las identidades particulares. El neoliberalismo no crea tales distinciones, pero puede explotarlas fácilmente, cuando no fomentarlas.

A principios de la década de 1970, aquellos que aspiraban a la libertad individual y a la justicia social, pudieron hacer causa común frente a lo que muchos percibían como un enemigo común. Se pensaba que las poderosas corporaciones, aliadas con un Estado intervencionista, iban a gobernar el mundo de formas opresivas para los individuos y, en el plano social, injustas. La Guerra de Vietnam fue el catalizador más obvio de este descontento, pero las actividades destructivas de las corporaciones y del Estado en relación con el medio ambiente, la presión hacia un consumismo irracional, el fracaso para abordar las cuestiones sociales y responder adecuadamente a la diversidad existente, así como también las intensas restricciones sobre las oportunidades individuales y sobre los comportamientos personales mediante un control dirigido tanto por el Estado como por las «tradiciones» también eran una fuente de malestar general. Los derechos civiles fueron uno de los ejes, y las cuestiones relativas a la sexualidad y a los derechos reproductivos estuvieron muy presentes. Para la mayor parte de las personas comprometidas en el movimiento del 68, el enemigo era un Estado intrusivo que tenía que ser reformado. Y, en este punto, los neoliberales no tenían mucho que objetar. Pero las corporaciones, las empresas y el sistema de mercado capitalista también eran considerados enemigos primordiales que exigían ser revisados, cuando no ser objeto de una transformación revolucionaria: de ahí la amenaza al poder de clase capitalista. A través de la captura de los ideales de la libertad individual y volviéndolos contra las prácticas intervencionistas y reguladoras del Estado, los intereses de la clase capitalista podían esperar proteger e incluso restaurar su posición. El neoliberalismo podía desempeñar de manera excelente esta tarea ideológica. Pero debía estar respaldado por una estrategia práctica que pusiera el énfasis en la libertad de elección del consumidor, no sólo respecto a productos concretos, sino también respecto a estilos de vida, modos de

expresión y una amplia gama de prácticas culturales. La neoliberalización requería tanto política como económicamente, la construcción de una cultura populista neoliberal basada en un mercado de consumismo diferenciado y en el libertarismo individual. En este sentido, se demostró más que compatible con el impulso cultural llamado «posmodernidad», que durante largo tiempo había permanecido latente batiendo sus alas pero que ahora podría alzar su vuelo plenamente consumado como un referente dominante tanto en el plano intelectual como cultural. Este fue el desafío que las corporaciones y las elites de clase decidieron fraguar de manera velada en la década de 1980.

Nada de esto estaba muy claro en aquél entonces. Los movimientos de izquierda no fueron capaces de reconocer o de confrontar, y mucho menos de trascender, la tensión inherente entre la búsqueda de libertades individuales y la justicia social. Pero sospecho que de manera intuitiva el problema era bastante nítido para muchos de los miembros de las clases altas, incluso aquellos que nunca habían leído a Hayek o siquiera oído hablar de la teoría neoliberal. Quisiera ilustrar esta idea mediante un análisis comparativo del giro neoliberal en Estados Unidos y en Gran Bretaña en los turbulentos años de la década de 1970.

En el caso de Estados Unidos, comienzo con una nota confidencial enviada por Lewis Powell a la Cámara de Comercio estadounidense en agosto de 1971. Powell, a punto de ser elevado al Tribunal Supremo por Richard Nixon, sostenía que la crítica y la oposición al sistema de la libre empresa estadounidense había llegado demasiado lejos y que «había llegado el momento -de hecho, ya era tarde- para que la sabiduría, la inteligencia y los recursos de las empresas estadounidenses pudieran ser lanzados contra aquellos que lo destruirían». Powell sostenía que la acción individual era insuficiente. «La fuerza -escribió- descansa en la organización, en una meticulosa planificación a largo plazo y en la implementación, en concordancia con una acción proseguida durante un periodo indefinido de años, en un nivel de financiación únicamente alcanzable mediante el esfuerzo conjunto, y en el poder político, únicamente alcanzable a través de la unidad de acción y de las organizaciones nacionales». La Cámara Nacional de Comercio, aseveraba, debía encabezar el asalto a las instituciones más importantes - universidades, escuelas, medios de comunicación, publicidad, tribunales- en aras a cuestionar el modo de pensar de los individuos «acerca de la empresa, la ley, la cultura, y el individuo». Las empresas estadounidenses no carecían de recursos para realizar un esfuerzo de esta envergadura, particularmente si se hacía un fondo común<sup>54</sup>.

En qué medida influyó directamente esta llamada a implicarse en una guerra de clase, es difícil de decir. Pero sabemos con seguridad que la Cámara de Comercio estadounidense expandió seguidamente la lista de sus integrantes de cerca de 60.000 empresas en 1972 a

<sup>54</sup> J. Court, *Corporateering. How Corporate Power Steals your Personal Freedom*, Nueva York, J. P. Tarcher/Putnam, 2003, pp. 33-38.

su capacidad natural para reproducirse. Los bancos de peces -las sardinas de California, el bacalao de Terranova, y la lubina chilena- son un ejemplo clásico de cómo un recurso explotado a una tasa «óptima», de pronto se agota sin ningún aparente síntoma previo<sup>265</sup>. Un caso menos dramático pero igualmente maligno lo constituye el sector forestal. La insistencia neoliberal en la privatización torna difícil establecer cualquier acuerdo global sobre unos principios de gestión de los bosques que garanticen la protección de hábitats valiosos y de la biodiversidad, en particular, en los bosques tropicales húmedos. En los países pobres con importantes recursos forestales, la presión para incrementar las exportaciones y para permitir adquisiciones en propiedad y concesiones a empresas extranjeras conlleva la disolución de los mínimos sistemas de protección que puedan existir. La sobreexplotación de los recursos forestales ocurrida en Chile tras el proceso de privatización es un claro ejemplo de ello. Pero los programas de ajuste estructural administrados por el FMI han tenido un impacto todavía más perjudicial. Las medidas de austeridad impuestas han mermado el dinero que los países más pobres pueden destinar a la gestión de los bosques. Igualmente, estos países son presionados para privatizar los bosques y permitir su explotación por compañías madereras extranjeras a través de la celebración de contratos a corto plazo. Cuando existe la presión por conseguir divisas extranjeras para liquidar las deudas, resulta tentador conceder la máxima tasa de explotación a corto plazo. Por si eso fuera poco, cuando la austeridad ordenada por el FMI y el desempleo alcanzan un punto insostenible, las poblaciones trocadas redundantes pueden pretender buscar un medio de subsistencia en la tierra y embarcarse en una limpieza indiscriminada del bosque para obtener terrenos despejados. En tanto que el método preferido es la quema, las poblaciones campesinas sin tierra junto con las compañías taladoras pueden provocar destrucciones masivas de los recursos forestales de un día para otro, como ha ocurrido en Brasil, en Indonesia, y en varios países africanos<sup>266</sup>. No es accidental que entre 1997 y 1998, en el punto álgido de la crisis financiera que expulsó a millones de personas del mercado de trabajo en Indonesia, una oleada de incendios descontrolados arrasara Sumatra (que no era ajena a las operaciones de talado de árboles de uno de los hombres de negocios de origen chino más ricos vinculados a Suharto), creando una enorme capa de humo que encapotó el cielo de todo el sureste asiático durante Varios meses. Únicamente cuando los Estados, y otros grupos de interés, se encuentran preparados para contravenir las reglas neoliberales y los intereses de clase que las sostienen -algo que ha ocurrido en un número significativo de ocasiones- es posible asistir a un uso en alguna medida equilibrado del medio ambiente.

<sup>265</sup> Petras y H. Velmeyer, *System in Crisis. The Dynamics of Free Market Capitalism*, Londres, Zed Books, 2003, pp. 87-110.

<sup>266</sup> Americans Lands Alliance, «IMF Policies Lead to Global Deforestation», ([Online](http://americanlands.org/imfreport.htm)) <http://americanlands.org/imfreport.htm>

## Sobre los derechos

La neoliberalización ha fecundado dentro de sí misma una difundida cultura de oposición. Sin embargo, la oposición tiende a aceptar muchas de las proposiciones básicas del neoliberalismo. Las temáticas se centran en las contradicciones internas. Se abordan con mucha seriedad las cuestiones relativas a los derechos y a las libertades individuales, por ejemplo, y se las opone al autoritarismo y a la frecuente arbitrariedad del poder político, económico y de clase. Se toma la retórica neoliberal de la mejora del bienestar colectivo y se condena la neoliberalización por dejar de cumplir sus propias aspiraciones. Consideremos, por ejemplo, el primer párrafo sustancial del documento neoliberal por excelencia, el acuerdo de la OMC. Su actuación debe tender:

a elevar los niveles de vida, a lograr el pleno empleo y un volumen considerable y en constante aumento de ingresos reales y de demanda efectiva, y a acrecentar la producción y el comercio de bienes y servicios, permitiendo al mismo tiempo la utilización óptima de los recursos mundiales de conformidad con el objetivo de un desarrollo sostenible, y procurando proteger y preservar el medio ambiente e incrementar los medios para hacerlo, de manera compatible con sus respectivas necesidades e intereses según los diferentes niveles de desarrollo económico<sup>267</sup>.

Este tipo de esperanzas piadosas también pueden encontrarse en los pronunciamientos del Banco Mundial («nuestro primer objetivo es la reducción de la pobreza»). Nada de esto encaja fácilmente con las prácticas reales que apuntalan la restauración o la creación del poder de clase y los resultados en términos de empobrecimiento de la población y de degradación medioambiental.

El creciente peso de la oposición articulada en torno a la violación de derechos ha sido espectacular desde 1980. Previamente, de acuerdo con Chandler, una revista prominente como *Foreign Affairs* no publicó ni un solo artículo sobre los derechos humanos<sup>268</sup>. Los temas relacionados con los derechos humanos ganaron trascendencia después de 1980 y sin duda se dispararon a raíz de los acontecimientos de la plaza de Tiananmen y del fin de la Guerra Fría en 1989. Este proceso se corresponde exactamente con la trayectoria seguida por la neoliberalización, estando ambos movimientos profundamente imbricados entre sí. Indudablemente, la insistencia neoliberal en el individuo como el elemento fundacional de la vida político-económica abre la puerta al activismo por los derechos individuales. Pero al concentrarse en esos derechos en vez de en la creación o la recreación de estructuras sólidas y abiertas de gobierno democrático, la oposición cultiva métodos que no pueden escapar al marco neoliberal. La preocupación neoliberal por el individuo sobrepasa cualquier preocupación socialdemócrata por la igualdad, la democracia y los vínculos de solidaridad

<sup>267</sup> D. Rodrik, *The Global Governance of Trade. As if development really Mattered*, Nueva York, United Nations Development Program, 2001, p. 9.

<sup>268</sup> D. Chandler, *From Kosovo to Kabul. Human Rights and International Intervention*, Londres, Pluto press, 2002, p. 89.

social. Por otro lado, la frecuente apelación a la acción legal, confirma la preferencia neoliberal por apelar al poder judicial y al ejecutivo, en lugar de al parlamentario. Pero perderse en los vericuetos de los cauces legales es algo muy lento y costoso y, en cualquier caso, los intereses de la clase dominante tienen mucho más peso ante los tribunales por la tradicional lealtad de clase de la judicatura. Las decisiones legales tienden a favorecer los derechos de la propiedad privada y la tasa de beneficio sobre el derecho a la igualdad y a la justicia social. En opinión de Chandler, es «la desilusión de la élite liberal con las personas ordinarias y con el proceso político [lo que] les lleva a centrarse en el individuo como sujeto de derechos, llevando su caso ante el juez que le escuchará y dictará su veredicto»<sup>269</sup>.

En tanto que los individuos más necesitados carecen de los recursos económicos para defender sus propios derechos, la única forma de articular este ideal es mediante la formación de grupos de defensa. El surgimiento de los grupos de defensa y de las ONG, que han crecido de manera espectacular desde la década de 1980, ha acompañado al giro neoliberal al igual que lo han hecho los discursos sobre los derechos en términos más generales. En muchos casos, las ONG se han adentrado en el vacío de protección social dejado atrás por el abandono del Estado de actividades que anteriormente le pertenecían. Ésto equivale a una privatización protagonizada por las ONG. En ocasiones, su entrada ha contribuido a acelerar el abandono del Estado del sistema de provisión social. Por lo tanto, las ONG funcionan como «caballos de Troya para el neoliberalismo global»<sup>270</sup>. Por otra parte, las ONG no son instituciones esencialmente democráticas. Tienden a ser elitistas, no tienen la obligación de rendir cuentas ante nadie (salvo a sus donantes) y, por definición, guardan una apreciable distancia con las personas que pretenden proteger o ayudar, con independencia de las buenas intenciones que alberguen o de lo progresistas que puedan ser. Con frecuencia sus agendas no son públicas, y prefieren la negociación directa con el poder estatal o de clase, o influir en sus decisiones. A menudo más que representar a su clientela, su actividad consiste en controlarla. Proclaman y presumen de hablar en beneficio de los que no pueden hablar por sí mismos, incluso definen los intereses de aquellos por los que hablan (como si las personas fueran incapaces de hacerlo por sí mismas). Pero la legitimidad de su estatus siempre queda abierta a la duda. Por ejemplo, cuando estas organizaciones se movilizan con éxito para que se prohíba el trabajo infantil en las actividades productivas, como una cuestión de derechos humanos universales, puede que estén debilitando economías en las que el trabajo es fundamental para la supervivencia de familias enteras. Si no se ofrece ninguna alternativa económica viable, los niños pueden que sean vendidos a redes de prostitución (originando el nacimiento de otro grupo de defensa que persiga la erradicación de ésta). La universalidad que se presupone en «el lenguaje de los derechos», y la dedicación de las ONG y de los grupos de defensa a los principios universales no encajan bien con las

<sup>269</sup> Ibid., p. 230.

<sup>270</sup> T. Wallace, «NGO Dilemas. Trojan Horses for Global Neoliberalism?», *Socialist Register*, Londres, Merlin Press, 2003, pp. 202-219. Para un análisis general del papel de las ONG, véase M. Edwards y D. Hulme (eds.), *Non-Governmental Organisations. Performance and Accountability*, Londres, Earthscan, 1995.

particularidades locales y con las prácticas diarias de la vida económica y política existente bajo la presión conjunta de la mercantilización y la privatización<sup>271</sup>.

Pero hay otra razón por la que esta particular cultura opositora ha ganado tantas adhesiones en los últimos años. La acumulación por desposesión implica un conjunto muy distinto de prácticas desde la acumulación hasta la expansión del trabajo asalariado en la industria y en la agricultura. Este último proceso, que dominó los procesos de acumulación de capital en la década de 1950 y 1960, dio lugar a una cultura opositora (como la que se inscribe en los sindicatos y en los partidos políticos obreros) que produjo el liberalismo embridado. Por otro lado, la desposesión se produce de manera fragmentada y particular: una privatización aquí, un proceso de degradación medioambiental allá, o una crisis financiera o de endeudamiento acullá. Es difícil oponerse a toda esta especificidad y particularidad sin apelar a principios universales. La desposesión entraña la pérdida de derechos. De ahí el giro hacia una retórica universalista de los derechos humanos, la dignidad, las prácticas ecológicas sostenibles, los derechos medioambientales, y otras temáticas afines, como base de una política opositora unida.

Esta apelación al universalismo de los derechos es un arma de doble filo. Puede y debe ser utilizada sin olvidar en ningún momento los fines progresistas que la animan. La tradición que encuentra sus mayores exponentes en Amnistía Internacional, Médicos sin Fronteras, y otras organizaciones próximas a ellas, no puede ser desechada como un mero accesorio del pensamiento neoliberal. Toda la historia del humanismo (tanto en su versión occidental -clásicamente liberal- como en sus diversas versiones no occidentales) es demasiado compleja como para permitirlo. Pero los objetivos limitados de muchos discursos sobre los derechos (en el caso de Amnistía Internacional hasta hace poco su único objeto de atención eran los derechos civiles y políticos netamente separados de los económicos) hace que sean demasiado fáciles de absorber dentro del marco neoliberal. El universalismo parece funcionar particularmente bien cuando se abordan cuestiones globales como el cambio climático, el agujero de la capa de ozono o la pérdida de la biodiversidad a través de la destrucción del hábitat. Pero sus resultados en la arena de los derechos humanos resultan más dudosos, dada la diversidad de las circunstancias político-económicas y de las prácticas culturales que existen en el mundo. Además, no ha sido nada difícil incorporar las cuestiones relativas a los derechos humanos en calidad de «espadas del Imperio» (por utilizar la mordaz caracterización de Bartholomew y Breakspear)<sup>272</sup>. Por ejemplo, los llamados «halcones liberales» de Estados Unidos han apelado a ellos para justificar intervenciones imperialistas en Kosovo, Timor Oriental, Haití, y, sobre todo, en

<sup>271</sup> L. Gill, *Teetering on the Rim*, Nueva York, Columbia University Press, 2000; J. Cowan, M. B. Dembour, y R. Wilson (eds.), *Culture and Rights. Anthropological Perspectives*, Cambridge, Cambridge University Press, 2001.

<sup>272</sup> A. Bartholomew y J. Breakspear, «Human Rights as Swords of Empire», *Socialist Register*, Londres, Merlin Press, 2003, pp. 124-125.

Afganistán e Iraq. Justifican el humanismo militar «en nombre de la protección de la libertad, de los derechos humanos y la democracia también cuando se persigue de manera unilateral por una autoproclamada potencia imperialista» como Estados Unidos<sup>273</sup>. A escala más amplia, es difícil no concluir con Chandler que «las raíces del humanitarismo actual basado en los derechos humanos radican en el creciente consenso en torno al apoyo de la implicación occidental en los asuntos internos del mundo en vías en desarrollo que se registra desde la década de 1970». El principal argumento descansa en que «las instituciones internacionales, los tribunales internacionales e internos de los países, las ONG o los comités éticos son más representativos de las necesidades del pueblo que los gobiernos elegidos en las urnas. Los gobiernos y los representantes electos son considerados sospechosos precisamente porque deben rendir cuentas ante su electorado y, por lo tanto, se percibe que tienen intereses “particulares” en lugar de actuar conforme a principios éticos»<sup>274</sup>. En el ámbito doméstico, los efectos no son menos dañinos, ya que tal planteamiento consigue estrechar «el debate político público a través de la legitimación del papel de la toma de decisiones por parte de la judicatura, de los grupos de trabajo y de los comités éticos, que no son órganos electos». Los efectos políticos pueden ser debilitadores. «Lejos de cuestionar el aislamiento individual y la pasividad de nuestras atomizadas sociedades, la regulación de los derechos humanos únicamente puede institucionalizar estas divisiones». Y, lo que es peor, «la visión degradada del mundo social proporcionada por el discurso ético de los derechos humanos sirve, como cualquier otra teoría de la elite, para sostener la fe en sí misma de la clase gobernante»<sup>275</sup>.

A la luz de esta crítica, resulta tentador evitar toda apelación a los universales, por esta falla insalvable que los atraviesa, y abandonar toda mención a los derechos, entendidos como una imposición injustificable de una ética abstracta basada en el mercado, puesto que sirven para enmascarar el proceso de restauración del poder de clase. Aunque ambas proposiciones merecen una consideración seria, en mi opinión, no resulta acertado abandonar el campo de los derechos a la hegemonía neoliberal. Hay una batalla que librar no sólo acerca de qué universales y qué derechos deberían invocarse en situaciones concretas, sino también sobre cómo deberían construirse esos principios y concepciones universales de los derechos. La conexión crítica forjada entre el neoliberalismo, como un conjunto particular de prácticas políticas económicas, y la creciente apelación a cierto tipo de derechos universales como fundamento ético de la legitimidad política y moral debería ponernos en alerta. Los decretos de Bremer impusieron sobre Iraq una cierta concepción de los derechos. A la vez que violan el derecho de autodeterminación de ese país. «Entre dos derechos», dice la célebre frase de Marx, «la fuerza decide»<sup>276</sup>. Si la restauración de clase implica la imposición de un

<sup>273</sup> *Ibid.*, p. 126.

<sup>274</sup> D. Chandler, *From Kosovo to Kabul. Human Rights and International Intervention*, cit., pp. 27 y 218.

<sup>275</sup> *Ibid.*, p. 235

<sup>276</sup> K. Marx, *Capital*, Nueva York, Internacional Publishers, 1967, t. I, p. 225 [ed. cast.: *El capital*, Madrid, Ediciones Akal, 2000].

conjunto característico de derechos, entonces, la resistencia a esa imposición implica la lucha por derechos enteramente diferentes.

La justicia entendida en sentido positivo como un derecho ha sido, por ejemplo, un poderoso elemento de agitación en los movimientos políticos: las luchas contra la injusticia en ocasiones han animado movimientos a favor de la transformación de la sociedad. La sugerente historia del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos es un claro ejemplo de ello. Por supuesto, el problema es que hay innumerables concepciones distintas de la justicia a las que podemos apelar. Pero los estudios muestran que ciertos procesos sociales dominantes erigen y se apoyan en ciertas concepciones de la justicia y de los derechos. Cuestionar esos derechos concretos es cuestionar los procesos sociales a los que son inherentes. De manera inversa, demuestran que es imposible desamparar a la sociedad de ciertos procesos sociales dominantes (como el de la acumulación de capital a través del intercambio en el mercado) y auxiliarla con otros (como la democracia política y la acción colectiva) sin desplazar de manera simultánea la lealtad a una concepción dominante de los derechos y de la justicia, hacia otra distinta. La dificultad de todas las concretizaciones ideales de los derechos y de la justicia reside en que las mismas ocultan esta conexión. Únicamente cuando se hacen explícitas en relación con algún proceso social encuentran un significado social<sup>277</sup>.

Consideremos el caso del neoliberalismo. Los derechos se agrupan en torno a dos lógicas de poder que pueden ser dominantes, la del Estado territorial y la del capital<sup>278</sup>. Por más que deseemos que los derechos sean universales, es el Estado el que determina su vigencia. Si el poder político no está dispuesto a velar por su cumplimiento, entonces, la noción de los derechos permanece vacía. Por lo tanto, los derechos de la ciudadanía son derivados y condicionales. La territorialidad de la jurisdicción se convierte, pues, en un problema. Ésto tiene un lado positivo y un lado negativo. Las personas apátridas, los inmigrantes ilegales, o las personas en situaciones análogas hacen emerger preguntas espinosas. Quién es y quién no es «ciudadano» se convierte en una cuestión de suma importancia en la definición de los principios de inclusión y de exclusión que se establecen dentro de la especificación territorial del Estado. El modo en el que el Estado ejerce su soberanía respecto a los derechos es de suyo una cuestión polémica, pero existen límites que han sido impuestos sobre esa soberanía (tal y como está descubriendo China) por reglas globales inscritas en la acumulación de capital neoliberal. No obstante, el Estado-nación, mediante su monopolio de las formas legítimas del uso de la violencia, puede definir de modo hobbesiano su propio haz de derechos y únicamente quedar laxamente obligado a través de convenios internacionales. Estados Unidos, por ejemplo, insiste en su derecho a que no se le exija responsabilidad alguna por la comisión de crímenes contra la humanidad, tal y como se

<sup>277</sup> D. Harvey “Right to the City”, en R. Scholar (ed.), *Divided Cities. Oxford Amnesty Lectures 2003*, Oxford University Press, 2006.

<sup>278</sup> D. Harvey, *The New Imperialism*, Oxford, Oxford University Press, 2003, cap. 2 [ed. cast.: *El Nuevo imperialismo*, Madrid, «Cuestiones de antagonismo, 26», Ediciones Akal, 2004, cap. 2].

definen en el ámbito internacional, a la vez que insiste en que criminales de guerra de otros lugares sean enjuiciados ante los mismos tribunales cuya autoridad niega en relación a sus propios ciudadanos.

Vivir bajo el neoliberalismo también significa aceptar o someterse a ese haz de derechos que resulta necesario para la acumulación de capital. Vivimos, pues, en una sociedad en la que el derecho inalienable de los individuos (y recordemos que las corporaciones son definidas como personas ante la ley) a la propiedad privada y a obtener beneficios está por encima de cualquier otra concepción de los derechos inalienables que pueda concebirse. Los defensores de este régimen de derechos argumentan, de manera impecable, que estimula las «virtudes burguesas», sin las que todos los habitantes de la tierra estarían mucho peor. Este régimen contempla la responsabilidad individual; la autonomía respecto a la injerencia estatal (que a menudo coloca este régimen de derechos en severa oposición a los definidos en el seno del Estado); la igualdad de oportunidades en el mercado y ante la ley; la recompensa a la iniciativa y al esfuerzo empresarial; el cuidado de uno mismo y de lo que es de uno; y un mercado abierto que permita una amplia gama de libertades de elección tanto en la contratación como en el intercambio. Este sistema de derechos es aún más convincente cuando se extiende al derecho de propiedad sobre el propio cuerpo (que afianza el derecho de la persona a contratar libremente la venta de su propia fuerza de trabajo así como también el ser tratada con dignidad y con respeto, y el no sufrir coacciones físicas como la esclavitud) y el derecho a la libertad de pensamiento, de expresión y de discurso. Estos derechos secundarios son atrayentes. Muchos de nosotros dependemos considerablemente de ellos. Pero lo hacemos en buena medida en tanto que mendigos que viven de las migas que sobran de la mesa del rico.

No puedo convencer a nadie mediante argumentos filosóficos de que el régimen de derechos neoliberal es injusto. Pero la objeción al mismo es bastante sencilla: aceptarlo es aceptar que no hay más alternativa que vivir bajo un régimen de incesante acumulación de capital y crecimiento económico en el que no importan sus consecuencias sociales, ecológicas o políticas. Recíprocamente, esta incesante acumulación de capital conlleva que el régimen de derechos neoliberal deba expandirse geográficamente alrededor del globo si es necesario mediante el uso de la violencia (como en Chile e Iraq), mediante prácticas imperialistas (como las ejecutadas por la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional, y el Banco Mundial) o mediante la acumulación primitiva (como en China y en Rusia). El derecho inalienable a la propiedad privada y a la obtención de beneficios será instaurado con carácter universal, por las buenas o por las malas. Esto es precisamente a lo que Bush se refiere cuando dice que Estados Unidos está consagrado a expandir la esfera de la libertad por todo el globo.

Pero éstos no son los únicos derechos a nuestro alcance. Incluso dentro de la concepción liberal, tal y como se explica en la Carta de las Naciones Unidas, hay derechos

secundarios, como la libertad de opinión y de expresión, el derecho a la educación y a la seguridad económica, o el derecho a formar sindicatos. Fortalecer estos derechos supondría un serio desafío al neoliberalismo. Convertir estos derechos secundarios en prioritarios y los derechos prioritarios a la propiedad privada y al beneficio, en secundarios, sería una revolución de gran envergadura de las prácticas político-económicas. También hay concepciones enteramente diferentes de los derechos a los que podemos apelar como, por ejemplo, el derecho al acceso a los bienes comunes globales o a una seguridad básica en materia de alimentos. «Entre derechos iguales la fuerza decide». Las luchas políticas sobre una concepción adecuada de los derechos, e incluso de la propia libertad, ocupan un lugar central en la búsqueda de alternativas.